

MATRICES POLÍTICAS EN PERÚ Y ARGENTINA: ESCENARIOS AFINES

por Stella Escandell*
Silvia Nakano**

Introducción

Tomando como marco la definición de matriz política como un sistema de variables y constreñimientos, fijadoras de límites y probabilidades diferenciales para la concreción de objetivos (Acuña, 1995a), es posible discernir una cierta afinidad en los escenarios políticos que se han ido constituyendo en los años noventa en Perú y Argentina, bajo la impronta de Fujimori y Menem.

Más allá de las diferencias que hay entre la esencia y el origen de esas probabilidades y limitaciones, en ambos casos es posible visualizar convergencias en varios puntos.

En primer lugar, los dos presidentes han visto reafirmada su legitimidad en las elecciones por una vasta coalición de sectores sociales diversos, inclusive, en el caso argentino, antaño antagónicos en cuanto a representación electoral, que les han dado triunfos del orden del 50 y 60% respectivamente.

Desde esta perspectiva, tanto en uno como en otro, a pesar de las características del ajuste estructural profundo en el que se han visto inmersos, los sectores populares han sido el principal componente del voto.

Este fenómeno se ha visto acompañado por una baja *performance* de los partidos históricos de oposición, en ambos casos superados en resultados electorales por una coalición fuertemente articulada en torno a sectores de

* Lic. en Ciencia Política, UBA. Maestría en Administración Pública INAP/Facultad de Ciencias Económicas UBA

** Lic. en Ciencias de la Educación, UBA. Maestría en Administración Pública INAP/Facultad de Ciencias Económicas UBA.

Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el 2º Congreso Nacional de Ciencia Política "Globalización, entre el conflicto y la integración", Mendoza, 1 al 4 de Noviembre de 1995

Queremos agradecer especialmente a Vicente Palermo, quien nos incentivó a publicar este trabajo. Desde ya, de ningún modo es responsable de los errores y omisiones en los que hayamos incurrido.

clase media y media alta con un significativo componente de intelectualidad.

Otro punto de encuentro es el estilo de gestión fuertemente centrado en el Poder Ejecutivo como artífice principal de leyes. Si bien Menem no clausuró el Parlamento como lo hizo Fujimori, éste funciona como apéndice del Ejecutivo, no restándole brillo a su rol protagónico, por ser del mismo color político.

Es necesario apuntar que tanto en uno y otro país, el Parlamento es visualizado por un alto porcentaje de la ciudadanía como un espacio poco creíble, sospechado de corrupción y tráfico de influencias y poco operativo en su función.¹

Este último hecho puede ser considerado como un llamado de atención ya que, como dejan traslucir los análisis políticos en el caso de Perú, Fujimori no ganó a pesar de haber cerrado el Congreso sino precisamente por ello; con lo cual lo que le otorga consenso a esta “matriz” no sería la legalidad tradicional de las instituciones sino la lógica de la eficacia, eficiencia y economía, a la cual se subordina y que redefine el modelo de consolidación democrática.

Intentaremos, entonces, desentrañar los hilos fundantes de la matriz política que se ha gestado en Perú y Argentina; una matriz que *a priori* parece llevar a la consolidación democrática en un sentido signado por una lógica de competencia política que ha borrado el perfil de los partidos, acentuando los personalismos y reforzando los liderazgos, con un nuevo carácter de los lazos representativos que tiende más a una democracia de lo público que a una democracia de partidos (Manin, 1992).

Una de las cuestiones que guía este trabajo es pensar la pertinencia de preguntarse si estos puntos de encuentro entre una y otra gestión no estarían indicando una tendencia que resulta de la aplicación de políticas en el marco de un ajuste estructural que fortalecen a la esfera del mercado al mismo tiempo que debilitan la esfera de la política y la ciudadanía, dando lugar a la emergencia de un orden institucional dentro de cánones democráticos pero que al mismo tiempo delinea un modelo excluyente y elitista (Smith, 1991).

1. La matriz política

Las matrices como sistema de variables y constreñimientos, fijadoras de límites y probabilidades diferenciales para la concreción de objetivos, son “contextos donde los actores se comportan sobre la base de una intencionalidad

¹ Cf. PÁSORA, 1993a y 1993b.

estratégica que articula sus intereses, preferencias, expectativas y frecuentemente errores de apreciación” (Acuña, 1995a).

Estos contextos no le son externos a los actores ya que “el comportamiento político no es mera consecuencia o variable dependiente de los condicionamientos que sufre un actor sino que además materializa la intención del actor de dar respuesta a, y muchas veces redefinir, estos condicionamientos” (Acuña, 1995a).

Este es un concepto dinámico que permite ver tanto las cuestiones estructurales como las distintas lógicas que subyacen en los principales actores en términos de su acción, permitiendo entrever los entrecruzamientos y juegos que se dan tanto entre ellos como con el contexto, en una relación de mutua influencia.

Pero no sólo se trata de comprender las distintas lógicas que se entrecruzan en la conformación del entramado de la matriz sino que también permite observar los cambios que tienen lugar al interior mismo de cada uno de los componentes.

Esto permitiría la delineación de futuros escenarios posibles en función de un análisis estratégico de los procesos políticos pasados.

Es en este sentido que hemos orientado la comparación entre Perú y Argentina, analizando la situación previa al acceso de Fujimori y Menem al gobierno por primera vez, las características constitutivas y de implementación de los planes de ajuste estructural (PAE) y el comportamiento de los diferentes actores, abonando el terreno de la reelección y de la consolidación de un tipo de democracia “fragmentaria”, cuestión que abordaremos en el último apartado.

Desde esa perspectiva, pondremos especial énfasis en el análisis de los partidos políticos, tradicionales y emergentes, cuya conducta y acciones jugaron y juegan un papel preponderante en el despliegue de estas matrices.

2. Factores económico-estructurales en Perú y Argentina

2.1. La herencia de Alan García

El gobierno de Alan García (APRA), con un discurso populista y un modelo económico de corte keynesiano que priorizaba la expansión de la demanda interna (relanzamiento de la economía por el consumo) y un rol central del estado en la economía (interviniendo en todas sus fases), demostró su fracaso al fin de la gestión en 1990.

Esta gestión no sólo había sumido al Perú en un proceso

hiperinflacionario, con una fuerte caída del ingreso, un agravamiento del índice de desocupación y subocupación a niveles alarmantes, además de un agudo proceso de descapitalización, sino que la adopción de medidas como la restricción de atención de los servicios de la deuda externa en 1985² y la estatización de la banca en julio 1987, se tradujo en un deterioro de la situación de Perú en el plano internacional con la consecuente restricción de crédito externo y el no ingreso de inversiones extranjeras.³

Si a esto se le suma la agudización de los fenómenos Sendero Luminoso y narcotráfico, podemos decir que en 1990, al final de la gestión de Alan García, el Perú se encontraba en un virtual estado de colapso.

En los siguientes cuadros se puede apreciar la evolución de algunos indicadores macroeconómicos al comienzo y al término de la administración de A. García, y en el caso argentino para 1983 y 1989.

PERÚ	1985	1990
Inflación anual	200%	2400%
Inflación mensual (julio)	10.3%	63.2%
Variación anual PBI	1.7%	-4.5%
Déficit fiscal/PBI	2.7%	7%
Deuda externa/PBI	59.4%	83.9%
Población adecuadamente empleada ⁴	54%	18%

Fuente: Elaboración propia en base a TOLEDO SEGURA, 1993.

² Ese año el gobierno decide unilateralmente restringir el pago de los servicios de la deuda externa a un 10% del valor FOB de las exportaciones anuales. Así en 1986 el Perú es declarado país inelegible para recibir nuevos préstamos por parte del FMI. Recién en 1989 y ante la amenaza de ser expulsado del FMI, Perú reinicia negociaciones para atender el servicio de la deuda.

³ La decisión de interrumpir los pagos no se limitó al FMI, también al BID, al BM, a la ALADI por lo que queda virtualmente aislado a nivel internacional.

⁴ Si consideramos la situación de Lima metropolitana, la situación del empleo es aún más grave. Para 1985 el porcentaje de desempleo era de 10,1%, el de sub-empleo 42,5% y la población adecuadamente empleada conformaba el 47,4%. En 1989 el desempleo constituía un 7,9%, el sub-empleo 73,5% y la población adecuadamente empleada había descendido al 18,6%. Fuente UGARTECHE, 1991.

ARGENTINA	1983	1989
Inflación anual	433,7%	4923,6%
Inflación mensual (julio)		197%
Variación anual PBI	3,7%	-6,2%
Déficit fiscal/PBI	9%	20,5 %
Deuda externa/PBI	21,34%	30%
Desempleo	4,7%	7,6%
Sub-empleo	5,9%	8,6%

Fuente: elaboración propia en base a FREDIANI, 1993.

2.2. *La inestable economía argentina*

La economía argentina se encontraba estancada desde 1970 y a partir de los 80 había entrado en franca recesión. Argentina venía sufriendo crónicos desequilibrios fiscales que eran subsanados con emisión monetaria, lo que implicaba una inflación crónica persistente.

Al inicio de su mandato Alfonsín intentó seguir en la vía keynesiana, bajo la gestión de B. Grinspun como Ministro de Economía. Se intentaba relanzar la economía por la demanda. La inflación persistente llevó, frente al riesgo de hiperinflación, a adoptar en 1985 el Plan Austral, implementado por un nuevo gabinete económico.

Este plan consistió en sucesivas devaluaciones, congelamiento de precios y salarios, cambio de moneda, desagio en los contratos, restricción en el gasto público. Pero no estaba acompañado de un programa de reformas estructurales ni de reforma del estado, así como de apertura de la economía, la cual continuaba siendo cerrada en muchos aspectos. Siguió persistiendo una indisciplina fiscal y monetaria.

Al Plan Austral, que contó con diferentes fases, le siguió en 1988 el Plan Primavera, que no lograría resolver el problema económico; y frente a la incertidumbre de las elecciones presidenciales de 1989, se generarían sucesivas corridas cambiarias y un aumento creciente de la inflación hasta llegar a la hiperinflación en junio/julio de 1989.

La no resolución del problema de la deuda comprometió severamente la gestión alfonsinista; sólo al final de ésta, con la firma del Plan Brady en marzo de 1989, se sentarían las bases probables para un nuevo punto de partida. Toda la gestión estuvo signada por la imposibilidad de cumplimiento de metas

macroeconómicas, generalización de stand-bys y memorándums de entendimiento firmados con el FMI.

Los planes implementados en este período pueden calificarse más bien de estabilización y no de ajuste estructural. Sólo el Plan Primavera podría entrar en esta última variante.

2.3. *El consenso de Washington*

Frente a la crítica situación de las economías latinoamericanas, en el seno de los organismos financieros internacionales se gestó una suerte de “recetario” a cumplir por los países, que sería precondition para el otorgamiento de nuevos créditos y/o facilidades ampliadas de pago de lo adeudado. Esto se conoció como el “Consenso de Washington” (Williamson, 1992 - Frediani, 1993).

Los principales ejes de la propuesta de política económica giraban en torno a:

- el cumplimiento de una disciplina fiscal que significaba el financiamiento del sector público con recursos genuinos sin recurrir a la emisión
- la reorientación del gasto público que implicaba una reducción del gasto de la administración pública central y su reorientación hacia gasto público que mejore la distribución del ingreso: salud, educación, etc.
- una reforma fiscal que permitiese ampliar las bases imponibles acompañada de una mejor administración de los entes recaudadores
- una liberalización financiera que llevara a la fijación de tasas de intereses por el mercado
- una política cambiaria que apuntara a un tipo de cambio único
- una liberalización comercial que significara la eliminación de restricciones al comercio exterior
- la eliminación de barreras de ingreso para inversiones extranjeras directas, garantizando la igualdad de condiciones con las empresas nacionales

- una política de privatizaciones de todas las empresas públicas a todos los niveles de gobierno
- una política de desregulaciones acelerada
- la garantía de los derechos de propiedad

La aplicación de estas “recetas” en Perú y en Argentina tuvo características diferenciales aunque fueron observadas en ambos casos.

Cabe señalar que, si bien estas recomendaciones son de orden esencialmente económico, dejan traslucir un rol creciente de los Estados Unidos en Latinoamérica.

Con la finalización del conflicto este-oeste, esta región vuelve a cobrar importancia en un plano estratégico para Estados Unidos, especialmente si tenemos en cuenta que los grandes enfrentamientos a partir de la década de los 90 se juegan en el plano de los intercambios comerciales internacionales.

Frente a la pérdida de posición de liderazgo de Estados Unidos debido a la consolidación de Japón y su área de influencia, y la competencia que representa el bloque europeo, los norteamericanos se encontraban en la necesidad de garantizarse el mercado continental.

Se ampliaron entonces los rubros de injerencia. En el caso argentino esto es particularmente visible en el lobby que realizan al momento de la privatización de empresas públicas por un lado, y en la creciente intervención del embajador norteamericano en la política nacional, por otro.

En el caso peruano, el esfuerzo está puesto en sentar las bases para garantizar el funcionamiento del mercado (lucha anti-insurgente y contra narcotráfico) aunque no ha dejado de intervenir en el proceso de privatizaciones. En general, se busca garantizar una cierta “seguridad jurídica”; las presiones de la OEA y de Estados Unidos en particular llevaron a Fujimori a que convocase en breve plazo a elecciones constituyente luego del autogolpe.

El contexto internacional es entonces un factor a tener en cuenta ya que también fija límites al accionar discrecional de los presidentes.

2.4. Plan de Ajuste Estructural a domicilio: el experimento Perú

Al asumir, Fujimori no contaba con un plan económico; durante su campaña sólo formuló vagas propuestas sin contenido, de corte populista.

Rápidamente adoptó los lineamientos propuestos por economistas proclives al Consenso de Washington y así negoció frente al Fondo Monetario Internacional su propuesta de ajuste, que no sólo fue aceptada sino que contó con el apoyo *in situ* de expertos del organismo para el diseño del programa, algo inédito en esta región.

Tres fueron las características principales del PAE conocido como Fujishock implementado en 1990 (Toledo Segura):

- un supershock de precios sin devaluación
- la simultaneidad entre estabilización y reformas institucionales (desregulación, privatización, liberalización)
- la implementación en los más cortos plazos

Se trataba de dominar la inflación y “eliminar la economía mixta, reducir al mínimo la actividad empresarial del estado, establecer una economía de mercado muy abierta al exterior, conformar un estado pequeño y reducido en sus roles” (González de Olarte, 1995).

El logro de estos objetivos ha sido parcialmente exitoso. La priorización del frente externo para lograr la reinserción en la economía mundial implicó la necesidad de cumplir con los pagos de la deuda, sin dejar de incurrir en déficit fiscal, y aplicar un programa monetario restrictivo para eliminar la inflación.

Para ello, la salida fue aumentar los impuestos indirectos y desregular el mercado cambiario (en lugar de proceder a una fuerte devaluación) para lograr que volviesen al sistema financiero las divisas extranjeras que habían salido de circulación por la hiperinflación.

La priorización del frente externo por sobre el interno ha llevado a una profundización de las desigualdades: “Si consideramos los resultados alcanzados en materia de reducción de la inflación, de reinserción y de equilibrio fiscal (hoy existe un superávit primario) y el crecimiento del PBI en los dos últimos años, el programa de ajuste ha sido exitoso. Sin embargo el PAE aún no ha solucionado el problema de empleo, la tasa de desempleo bordea el 10% en Lima y la tasa de sub-empleo aún es del orden del 65%, y la lucha contra la pobreza ha tenido resultados positivos aunque modestos; en 1994 el 50% de la población peruana estaba por debajo de la línea de la pobreza, mientras que en 1991 lo estaba el 53%” (González de Olarte, 1995).

2.5. *El irresistible ascenso de la convertibilidad*

La campaña presidencial de Menem fue tan poco clara en definiciones acerca del plan económico a implementar como la de Fujimori. Como candidato, prometió un “salario” para toda la población que llevaría a una “revolución productiva” con lo cual era de esperar que sus primeras medidas tuviesen un carácter distributivo populista.

Así como Fujimori sorprendió con el encargo de elaboración del plan a expertos internacionales, Menem no desentonó en el estilo al convocar a cubrir la titularidad de la cartera de Economía a un representante de Bunge y Born, uno de los holdings más importantes del país.

En este caso, el estupor ante la medida fue tal vez aún mayor ya que proviniendo de un gobierno peronista -con la trayectoria y doctrina que pesan en este partido- resultaba impensable para muchos.

Desde 1989 hasta 1991 se sucedieron una serie de planes, como se puede visualizar en el cuadro siguiente, que apuntaban en el mismo sentido: eliminar la inflación, restablecer los equilibrios macroeconómicos, implementar reformas estructurales.

Sin embargo, a diferencia del caso peruano, no fue posible implementar en la Argentina un equivalente al “Fujishock” a los inicios de la gestión. La causa de la diferencia podría explicarse en la existencia en Argentina de un contexto social diferente al de Perú, con actores sociales más organizados y con mayor capacidad de presión.

Los sucesivos planes que implicaban una línea errática, ineficiente en el logro de objetivos, a veces contradictoria (Acuña, 1995), en el fondo prepararon las condiciones para la aparición de Cavallo al frente de la cartera de Economía y la posibilidad de efectivizar un PAE como el Plan de Convertibilidad.

El requisito previo era la desarticulación de los sectores sindicales y la gestación de una alianza duradera con los sectores más concentrados de la economía.

Esta seguidilla de planes económicos (Bunge y Born, Erman) constituyeron una suerte de mesa de ensayo previa para el Plan de Convertibilidad instrumentado por Cavallo. Sin embargo, recién a partir de éste, el gobierno puede definitivamente contar con el compromiso por parte de los grandes grupos económicos, que anteriormente no habían respondido de la manera esperada a pesar de la inclusión de figuras del establishment liberal en los equipos económicos. En efecto, en 1990 se estaba todavía cerca de la posibilidad de un proceso hiperinflacionario como el de 1989. En el siguiente

cuadro podemos visualizar la sucesión de planes económicos durante la gestión Menem:

FECHA	MINISTRO	PLAN
Jul 89	Roig-Rapanelli	Plan BB
Dic 89	González	Erman I
Ene 90	González	Erman II (Plan Bonex ⁵)
Mar 90	González	Erman III
Jun 90	González	Erman IV
Oct 90	González	Erman V
Abr 91	Cavallo	Plan Convertibilidad

Fuente: FREDIANI, 1993.

El plan instrumentado por Domingo Cavallo (Plan de Convertibilidad) logró, en un plazo breve de tiempo, reducir la inflación a un dígito, revaluar la moneda, aumentar la recaudación impositiva reduciendo los márgenes de evasión fiscal, una reactivación de la demanda interna a pesar del congelamiento salarial a través del crédito, renegociar el pago de la deuda y sus intereses a través de la capitalización de una parte de ésta y una apertura de shock en cuanto al mercado que implicaba un déficit de balanza comercial subsanado por una fuerte entrada de capitales atraídos por una interesante tasa de interés (Acuña, 1995; Frediani, 1995; Damill/Fanelli, 1994).

Sin embargo, continúan existiendo tensiones que en un mediano plazo pueden comprometer la aplicación del programa.

El déficit de balanza comercial, que viene siendo equilibrada por el ingreso de capitales, puede tener graves consecuencias al revertirse las condiciones internacionales que hacen a la Argentina atractiva en términos de tasa de interés. En efecto, no existen "efectivas políticas sectoriales destinadas

⁵ Este plan no sólo debe ser considerado en su aspecto económico. Implicó un serio retroceso en términos de seguridad jurídica al transformarse depósitos de los ahorristas en los bancos a bonos, por decisión unilateral del gobierno y la entonces conducción económica. Teniendo en cuenta la menor autonomía de la justicia, los recursos interpuestos por los afectados no fueron considerados, fallando la Corte Suprema a favor del gobierno.

a promover y facilitar el aumento de la competitividad internacional de los sectores que producen exportables (agro, pesca, minería, industria)” (Frediani, 1993, pág 113).

No se ha avanzado en mejorar la distribución del ingreso; en los años noventa se ha agudizado la tendencia hacia la concentración de la riqueza tanto social como sectorial y regionalmente.

A nivel social, a pesar de un gasto público que sigue siendo elevado, las políticas que se implementan para compensar el costo social del ajuste han demostrado ser insuficientes y poco efectivas, con lo cual, la economía libre de mercado, más allá de la estabilidad de precios, sólo beneficiaría a un sector de la población.

Asimismo, el crecimiento del PBI no representa a la totalidad del país ya que existe una concentración en determinadas regiones, con lo que asistimos a una progresiva división en términos de economías regionales excluidas e incluidas.

En cuanto a lo sectorial, además de los desequilibrios entre los precios relativos de los bienes transables y los no transables, existe una concentración a nivel de grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas, que no acceden en igualdad de condiciones al crédito y que ven su supervivencia seriamente comprometida.

El proceso de reforma del estado, a nivel administrativo, es aún una cuestión pendiente, más allá de las privatizaciones que se hayan realizado. De hecho, todo el proceso estuvo cubierto por un manto de sospechas en cuanto a transparencia y legalidad: los niveles de corrupción en términos de sobornos y conflicto de intereses alcanzan a todos los estratos de la administración pública.

La implementación de los PAE en ambos países confirmaría entonces la hipótesis de Mancur Olson (1982) para quien el hecho de que un país adopte reformas de carácter estructural es producto de la confluencia de una imposibilidad por parte del estado de hacer frente a las presiones de los grupos de poder y la aparición de una crisis de características traumáticas que permite la creación de un consenso para el cambio.

3. Factores políticos, institucionales e ideológicos

3.1. *¿Billete sin retorno?*

Al llegar al gobierno, tanto Menem como Fujimori, establecieron un marco de alianzas y objetivos políticos enteramente contrarios a los que los

llevaron a la presidencia o, al menos, de lo que se podía vislumbrar de su discurso de campaña. Y en ambos procesos electorarios perdieron los candidatos que efectivamente no ocultaban la necesidad de un ajuste estructural: Angeloz y Vargas Llosa, respectivamente.

Pese a ello, las resistencias generadas hacia la adopción de medidas en el marco del PAE, que implicaban un potencial de conflicto en los dos países son de peso diametralmente opuesto, tanto por los apoyos políticos con los que ambos presidentes acceden al poder, por el peso de los actores políticos involucrados en dicha coyuntura, así como por la situación de éstos en relación con la coyuntura.

Menem era el candidato de un partido con tradición de poder y ocupación del gobierno y con una fuerte base electoral. Esto implica que no sólo tenía que vencer las resistencias externas a su partido, fundadas en la posibilidad de que mantuviese una sintonía con las políticas tradicionales de los anteriores gobiernos peronistas, sino que también las resistencias internas en el seno de su fuerza al conformar el gabinete con un representante de los grandes grupos económicos y hacer públicas sus primeras medidas de gobierno, no precisamente orientadas en la tradición del peronismo.

Y todo esto en un contexto hiperinflacionario jaqueado por saqueos y un alto grado de conflicto social.

Sin embargo, un sector mayoritario de la ciudadanía, sobre todo los sectores populares que buscan huir de una situación con características traumáticas, le otorgan al gobierno lo que V. Palermo (1993) denomina un "*consenso de fuga hacia adelante*", consenso que viene dado no por el convencimiento *a priori* de la necesidad de la línea político/económica que efectivamente instrumenta el gobierno, sino en la voluntad de enterrar el pasado.

Esta situación de déficit de gobernabilidad, paradójicamente, situó a Menem en una posición de fuerza, ya que el reclamo de "más gobierno" por parte de la sociedad le otorgó un margen de acción que le permitió subordinar a los sectores más reivindicativos de la etapa alfonsinista, esto es, los sindicatos, parte de su propia fuerza, y el establishment económico.

No sólo logró imponerse al poderoso aparato sindical peronista, con un hábil manejo de los incentivos selectivos así como con la instrumentación de medidas en detrimento de los derechos del trabajador (recorte del derecho de huelga, suspensiones), sino que también neutralizó los reclamos del empresariado local, tal como se desprende del análisis de Carlos Acuña (1992).

En efecto, "la estrategia del gobierno para neutralizar la reacción de estos grupos económicos (una de cuyas formas era la potencial alianza con sectores sindicales en base a un discurso "nacionalista" y de "defensa" del

estado) ha tendido a ser la de crear las condiciones para que estos grupos intercambien con el estado su pérdida de ganancias como proveedor estatal por la apropiación vía las privatizaciones de empresas públicas que quedan colocadas en posiciones monopólicas u oligopólicas” (C. Acuña, 1992).

Así, Menem logró cerrar la brecha de credibilidad que jaqueaba al gobierno al inicio de su gestión transformándose en “una fuerza que sin perder las bases electorales del peronismo habría adquirido capacidad de expresar a los sectores más productivos de la sociedad, y, al mismo tiempo, retener, en un papel subordinado- esto es, limitante de su potencial para desempeñarse como núcleo o socio de primer nivel, en coaliciones distribucionistas- a un sector sustancial del sindicalismo” (V Palermo, 1993).

La nota propia del menemismo fue, entonces, haber hecho del “consenso de fuga hacia adelante” un consenso liso y llano a pesar de las políticas neoliberales que van delineando progresivamente un modelo excluyente y elitista.⁶

Estas condiciones habilitarían al gobierno de Menem a negociar, en una correlación de fuerzas ampliamente favorable, la reforma de la constitución en 1994 que, una vez sancionada, le permitiría competir en la escena electoral por un segundo mandato.

Fujimori, en cambio, surge como un candidato independiente y no tiene una fuerza política con tradición y peso propio en la realidad peruana donde apoyarse.

En efecto, pocos meses antes de las elecciones conforma el movimiento Cambio 90, estructura que en su primer gabinete ni siquiera tendría una representación formal.

Sin embargo, tiene a su favor -y en esto hará eje durante toda su campaña- el descrédito que acompaña a los partidos tradicionales en la ciudadanía: el APRA como responsable del virtual colapso del Perú y el resto de los partidos tradicionales utilizando una táctica de oposición basada principalmente en un permanente juego de denuncias, buscando de esa manera asegurarse el próximo mandato. Estrategia de campaña que, mirando

⁶ WILLIAM SMITH (1991) plantea al respecto que: *“the structural reforms implemented by Argentina's civilian governments of the 1980's have accelerated the implanting of an exclusionary model of accumulation (...) there is a legitimate concern that the policies and developments discussed here -strengthening of market mechanisms, the erosion of the state's regulatory capacity, and the emasculation of political parties and collective actors (particularly those representing subaltern groups)- may also mean that the emerging institutional order while democratic, will also be strongly elitist and socially regressive”*.

retrospectivamente, repetía la actuación del APRA en la oposición bajo el gobierno de Acción Popular (Belaunde Terry) y que le permitió ganar las elecciones en 1985, sin necesidad de siquiera esbozar hacerse cargo de la crítica situación económica (Pásara 1993a).

Vargas Llosa en ese sentido, a pesar de haber ganado en la primera vuelta, puede ser considerado el principal derrotado. No sólo porque, como señaláramos al inicio del apartado, era el único de los candidatos que sostenía la necesidad del ajuste en su discurso de campaña, sino que además cargaba con una serie de factores que incrementaban el sentimiento hostil que se fue generando en la ciudadanía contra los actores políticos tradicionales.

En efecto, tal como lo recoge Pásara (1993a), Vargas Llosa pertenecía a la elite blanca que siempre había dominado un Perú que es mayoritariamente indígena, estaba respaldado por los partidos políticos tradicionales y llevaba a las principales figuras de éstos como candidatos parlamentarios. Fujimori se convirtió entonces en el beneficiario de "los emergentes sentimientos ciudadanos respecto de los partidos políticos".⁷

Al asumir su primer mandato en 1990, Fujimori rápidamente instrumentó acciones para eliminar dos cuestiones cruciales de la agenda nacional: el problema de la inflación y el problema Sendero Luminoso, creando una imagen de guerra interna que justificaba en principio toda política emprendida por el gobierno para con la sociedad.

A pesar de que en el Perú post-80 ya existía un predominio del Poder Ejecutivo que se evidenciaba en un creciente gobierno por decreto, el Parlamento, al serle adverso dada su composición mayoritariamente opositora y aún si se registra que rápidamente los decretos superaban a las leyes, se transformó en un obstáculo para la gestión fujimorista.

De algún modo, su estrategia confrontacionista con los partidos de la oposición y su constante ataque a los miembros del Parlamento desde el momento de su asunción dejaba entrever la posibilidad de una resolución del conflicto por la intervención de las Fuerzas Armadas.

El golpe efectivamente sucedió el 5/4/92 pero, a diferencia de otras épocas, esta vez no tuvo como principal protagonista a las Fuerzas Armadas sino que se trató de un autogolpe.

Y este hecho novedoso contó no solo con el respaldo de la dirigencia militar sino también con el de gran parte de la ciudadanía, que no lo percibió

⁷ Sin embargo, para PÁSARA los beneficiarios no son solamente los candidatos independientes (hace referencia a Ricardo Belmont) sino que cuenta a Sendero como el otro beneficiario de este descrédito creciente.

como “otro golpe” sino como un paso necesario visto que, de acuerdo a las declaraciones del Presidente del Comité Andino de Juristas, el parlamento en el caso peruano evidenciaba “una marcada obsecuencia, inoperancia e ineficiencia en el desempeño de las funciones legislativas representativas y de control político en los tres gobiernos democráticos” (Eguiguren, 1995).

La estrategia de Fujimori tuvo entonces un desenlace diferente. A través de los servicios de inteligencia instrumentados, especialmente la inteligencia del ejército para enfrentar a Sendero, el manejo del sector mayoritario de los medios de comunicación, un control absoluto del poder judicial y la implementación de una política económica en sintonía con los organismos financieros internacionales y con el respaldo de la dirigencia empresarial (Franco, 1994), Fujimori supo crear la imagen de un “gobierno fuerte” que enfrentaba los problemas de Perú.

Esto le permitió avanzar en el sentido de controlar el Congreso a través de su disolución y de la convocatoria a un congreso constituyente (Congreso Constituyente Democrático), que dio lugar a una nueva Constitución, reemplazando la de 1979, y con lo cual, en términos de Franco, operó una “*constitucionalización del poder de facto*”.

En esta Constitución, aprobada mediante un referéndum el 31/10/93 por escaso margen (52.24% contra 47.75%) y que empezó a regir a partir del 1/1/94, se habilitaba la reelección de Fujimori.

A través de un nuevo Congreso unicameral, que surge de representación proporcional, se incrementa el centralismo, echando por tierra los avances en materia de descentralización a nivel regional y municipal, considerando la redistribución de competencias que se opera en favor del nivel central.

Pero en esta ocasión se trata de un centralismo que rompe con los esquemas del estado planificador ya que se incorporan a la Constitución una serie de restricciones a la intervención del estado en la economía, en sintonía con el Consenso de Washington.

Asimismo, en relación al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo sale claramente favorecido por la ampliación de sus atribuciones y la supresión de mecanismos de control del primero sobre el segundo, generando de algún modo un desequilibrio de poderes y dándose, en la realidad, un fortalecimiento del presidencialismo a pesar de que el texto constitucional adicionaba un conjunto de instituciones de corte parlamentario (Eguiguren, 1995).

El “consenso de fuga hacia adelante” que le otorgó la ciudadanía a Fujimori en 1990, se transformó en consenso al momento de producirse el “autogolpe”, el cual fue nuevamente ratificado en 1995 cuando fue reelecto por una abrumadora mayoría de votos.

El control de la inflación, el reubicar a Perú en el contexto internacional y la victoria sobre Sendero Luminoso se convirtieron de algún modo en los éxitos de Fujimori.

Tanto en el caso argentino como en el peruano, procesos críticos como la hiperinflación y Sendero actúan como nuevos dadores de sentido, percibiéndose que los costos de proseguir con las reformas son claramente inferiores a los de retornar a una nueva situación de incertidumbre.

El lugar que ocupa la hiperinflación como fantasma y la “estabilidad” como futuro en el caso argentino, tienen su contracara en Perú en términos más militarizados: la resolución, en palabras del gobierno, de la “guerra interna”, no sólo hace referencia a Sendero Luminoso. En Sendero Luminoso están puestos a nivel simbólico todos los graves problemas de Perú. La inflación, la desinversión y la desindustrialización no son más que la cara económica de una misma moneda: el colapso de Perú, que en su cara política tiene a Sendero como el símbolo del degradamiento del espacio de lo político.

Así como en Argentina encontramos una fuerte asociación entre la demanda de estabilidad y el voto al gobierno, en Perú es posible asociar la necesidad de seguridad de la población y el consenso de Fujimori. En los dos países esta asociación es además reforzada por la no consolidación de alternativas creíbles desde la oposición.

En términos de Pásara (1993a), renovar ese nivel de adhesión exige entonces generar el clima en que esa necesidad se reproduzca.

De hecho en las dos campañas presidenciales para la reelección, además de resaltar los hechos generados casi como en una elección local, podemos encontrar además una permanente agitación del fantasma del pasado, instalando de algún modo la idea Luis Catorceava “*après moi, le déluge*”.

3.2. El Fujimorazo y la muerte jurídica de los partidos tradicionales

En el caso peruano estamos frente a una sociedad altamente polarizada no sólo en términos económico-sociales sino también étnica y culturalmente. Una cultura y tradición andinas milenarias cobran un peso fundamental en la historia de este país y en todo análisis de la realidad policlasista, multilingüe y pluricultural que configura su idiosincrasia.

El importante componente de origen rural y campesino de la clase media peruana la distingue de la argentina ya que posee características particulares, con intereses y demandas propias de un sector, que orientan su voto.

En ese sentido, no sería desacertado pensar que este sector -uno de los más castigados de las últimas décadas por sucesivos acontecimientos y políticas que obligaron a un gran porcentaje a la emigración hacia la urbe (fracaso de la reforma agraria, creciente desinversión en el campo, acciones directas e indirectas tanto de Sendero Luminoso como de las fuerzas militares antiinsurgentes)- haya conocido un giro en sus reclamos sectoriales y en lo que reconoce como objetivos prioritarios.

De hecho, en términos de Franco (1994), las demandas pueden estar impulsadas por una “ideología de derechos y oportunidades frente al estado formada a partir de procesos y experiencias colectivas anteriores”.

En ese marco, es válido pensar que, para el caso específico de la población emigrada, el aplacamiento de las acciones senderistas por parte del gobierno de Fujimori haya resignificado sus experiencias y reorientado el sentido de sus estrategias políticas. Por ello, aun si existen diferencias con las demandas de los sectores populares y la clase media urbanas, es posible reconocer un reclamo compartido de seguridad personal y colectiva y una coincidencia en la apelación al estado como principal interlocutor de quien, de conjunto, se espera respuestas concretas.

En este sentido, los principales partidos de la oposición no supieron posicionarse como articuladores y agregadores de las demandas ya que, constituidos en una suerte de casta aparte, aparecían como “autistas” frente a los sectores populares.

Al retirarse del espacio en que se forja el sentido común, esto es, la sociedad en una relación de ida y vuelta simbólica, los representantes de la oposición a la hora del autogolpe y al momento de la reelección, se vieron desinvertidos de su rol, no sólo por Fujimori sino también por gran parte de la propia ciudadanía: “Si la identidad de su función se forja en el reconocimiento del poder y en el de los electores, el desconocimiento de éstos amenaza disolver aquélla por la misma razón que si los espejos no nos devuelven nuestra imagen ... no existimos” (Franco, 1994).

Con la misma perspectiva, se podría tratar de aprehender el tema del cierre del Congreso por parte de Fujimori y el significado del respaldo de gran parte de la población aun por sobre los costos a pagar por el ajuste económico implementado.

Tal vez porque resulta más difícil realizar la autocrítica de la responsabilidad que les toca frente a esta cuestión puntual, es que varios análisis provenientes de la discusión interna de los partidos tradicionales que intentan explicar el apoyo de la población al autogolpe, parten de “culpabilizar” a la ciudadanía de mantener una tradición autoritaria, de poseer una cultura pasiva, de carecer de conciencia y ejercicio democráticos, y así sucesivamente.

La imposibilidad de incluirse en la escena de los acontecimientos y recoger las distintas señales de la opinión pública con respecto a sus prioridades y preferencias, impidió a la perspectiva de estos partidos “transformarse en un discurso atento a los cambios que se operan en el país” (Manuel Córdova, 1995), tanto a los efectos de la campaña eleccionaria como para corregir el rumbo de sus programas, políticas y acciones.

Por otra parte, se puede hacer sintonizar el apoyo efectivo del sector privado empresarial y de las elites dirigentes al programa de ajuste y reforma estructural, y a la estrategia política global encarada por Fujimori desde dos vertientes: una económica, donde los intereses económicos de este sector se ven beneficiados tanto con el reordenamiento estructural (“hacer los deberes” propuestos por Washington) y su participación acotada principalmente a la privatización de empresas estatales (Toledo Segura, 1993), como por el restablecimiento y normalización de las relaciones con los organismos financieros internacionales que devuelven al país una imagen y una capacidad de negociación frente a la comunidad económica internacional. Y otra vertiente que da respuesta a sus necesidades de tipo político-ideológica: “neoliberalismo, control autoritario de la sociedad, no retorno al pasado y sensación de estar integrándose a la modernidad occidental y al nuevo orden mundial” (Franco, 1994).

El escenario “formal” de la política también ha sufrido grandes cambios luego de la elección presidencial. Con la nueva ley electoral peruana (ley 26337) quedan eliminados del registro oficial de partidos el APRA, la IU, la AP y el PPC por no haber obtenido el porcentaje mínimo requerido de votos (Roth, 1995) que es del 5%. La “muerte jurídica” de estos partidos no es más que el registro patente de que la ciudadanía le ha vuelto la espalda a la tradicional clase política dirigente del país.

Esta pérdida de credibilidad hacia los partidos tradicionales en Perú puede empezar a contarse desde principios de los 80 con el retorno de la democracia. La agudización de las desigualdades y el incremento de la pobreza en que se vio sumida la población -incluso en niveles superiores a los registrados durante los 70 bajo el régimen militar- tras el fracaso de las políticas instrumentadas por los gobiernos de Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García (1985-1990), son considerados como el factor principal del descrédito de Acción Popular y del APRA y de la búsqueda de nuevos líderes, ajenos al sistema partidario tradicional.

Pero en esta tendencia también se puede incluir a la izquierda, con histórico peso en las urnas peruanas, que vio mermada su base electoral por ser visualizada como parte de la política tradicional y tras haber sufrido, además, desprendimientos y realineamientos que explican en parte su crisis.

Por otra parte, los sindicatos han perdido representatividad debido al nivel de desempleo y subempleo existentes. En efecto, los intereses de los sectores populares se encuentran representados fragmentariamente por diversos movimientos sociales que se articulan en torno a demandas de carácter netamente local y puntual.

En ese sentido, existiría una cierta "racionalidad en el retiro de lealtad al régimen, el conflicto entre ideología de derechos y oportunidades y un patrón de desigualdad socialmente inaceptable que concluye erosionando la legitimidad del régimen y la representatividad de sus actores" (Franco, 1994).

Una paradoja resultante de esta nueva ley electoral aprobada por la administración Fujimori es que, dado el alto piso de firmas requerido (500.000), limita la posibilidad de surgimiento de nuevas fuerzas, o sea el surgimiento de nuevos fenómenos independientes como el del actual presidente.

Los partidos tradicionales deberán de algún modo reinscribirse, lo que estaría implicando una suerte de "refundación".

3.3. Menem y su reelección

La reforma constitucional de 1994, además de introducir la posibilidad de reelección, implica también un avance en las atribuciones del Poder Ejecutivo en detrimento del Legislativo, siendo una prueba de esto la legalización de los decretos de necesidad y urgencia que habían caracterizado toda la gestión del menemismo.

En términos de Pásara (1993b), implica la ratificación de una "creciente rebaja de la competencia realmente ejercida por el Parlamento que, parcialmente enmarcada en la ley y en parte fundada en prácticas aceptadas, traslada al Poder Ejecutivo el lugar central de las decisiones que cuentan en la marcha del país".

La subordinación de la deliberación y el consenso a la ejecutividad (Novaro, 1995) no sólo acentúa el presidencialismo sino que, en el plano de una nueva matriz política, representa un cambio en la relación estado-sociedad, donde uno de los principales canales de intermediación, los partidos políticos, aparece interpelado en su rol.

En este sentido, el escenario que se configura a partir de la reelección merece especial atención.

Es notable que luego de seis años de gobierno, en un sistema fuertemente presidencialista, con el previsible desgaste que entraña tamaño tiempo en la gestión, a la hora de ir a las urnas en la elección presidencial del

14 de Mayo de este año, la ciudadanía argentina le haya otorgado un caudal de votos de casi el cincuenta por ciento.⁸

Y, al mismo tiempo, podemos constatar que además de haber accedido a este segundo mandato con un porcentaje mayor que el del 89, también cambió la composición de su voto.

Si bien sigue primando el componente de sectores populares, que aumenta su caudal a pesar de ser los principales damnificados de la aplicación del plan que desde 1991 rige la economía argentina, también fue votado por la clase alta: pierde los votos de los sectores medios que había logrado sumar en 1989 cuando aparecía como la única alternativa al escenario caótico de la hiperinflación y la ausencia de gobierno en el último tramo de la gestión Alfonsín, pero logra sumar a la clase alta, con profundas raíces antiperonistas que arrancan en la experiencia de la Unión Democrática.⁹

En efecto, como se desprende de algunos análisis electorales¹⁰, el voto al partido justicialista se dividió en 2 componentes:

- el voto de pertenencia y el de los que racionalmente confían y creen en el plan económico y de gobierno de la actual administración.
- el voto *status quo* que no necesariamente expresa una conformidad con el curso de acción del gobierno pero, ante el endeudamiento a través del crédito y la falta de creencia en las alternativas ofrecidas por la oposición, decide no alterar la composición del gobierno.

El voto de pertenencia partidaria, si bien sigue siendo importante en el caso del partido justicialista¹¹, le va cediendo lentamente el lugar al voto de

⁸ En 1989, Menem accede a la presidencia con el 47.3% de los votos, en 1995 obtiene 49.7%. Como fuera reflejado en el periódico *Buenos Aires Herald* (21/05/95) "He can now start his second term stronger than ever and not only because his new mandate is around 2.5 percent higher than the already convincing 47.3 percent obtained in 1989 -this time round his mandate stems from a proven and genuine policies rather than wild campaign promises about "salariazos" wage increases and reconquest of the Malvinas no matter how much bloodshed."

⁹ Coalición que se conforma en las elecciones de 1996 en torno a un eje aglutinante: la oposición visceral a Perón.

¹⁰ *Clarín*, 18/05/95, especialmente los comentarios de CARLOS FARA sobre la cuestión.

¹¹ Para NUN (1994, pág. 41) el caudal de votos que aún retiene, propios del peronismo, estaría dado en cierta medida porque "el aura populista del menemismo aún no se ha disipado del todo (...) Menem continúa hablando (y actuando) en nombre del

preferencia, fluctuante, organizado sobre la base de un cálculo.

Lo que lleva a la paradoja de que Menem haya triunfado entre los sectores desocupados: “no necesariamente el más perjudicado por una situación se pone en contra del supuesto perjudicador”.¹² Esto abonaría la tesis de que en épocas de crisis o transformaciones la gente tiende a conservar lo que posee y se vuelve más temerosa de los cambios.

La “dicotomía de hierro” que se planteó, seguridad versus cambio, demostraría tanto que el voto en la Argentina a partir de 1989 es un voto crecientemente gobernado por el cálculo utilitario de costos y beneficios, como que el poder de la oposición, en el sentido de constituirse como imaginario alternativo, ha resultado poco fecundo.

La otrora principal fuerza de oposición, la Unión Cívica Radical, pagó las consecuencias de haberse acercado al núcleo de poder a través del Pacto de Olivos¹³, punto inicial de la reforma constitucional de 1994 en la que se le otorgara a Menem la posibilidad de ser reelecto, opción no contemplada en la Constitución de 1853.

Si bien ha mantenido su puesto en cuanto a la representación institucional, el radicalismo ha perdido su posición en tanto fuerza electoral a manos del Frepaso, una coalición de sectores de variadas procedencias: radicales, peronistas, izquierda, progresismo, que supo canalizar el voto contrario a Menem a través de un discurso donde los ejes centrales pasaron por la honestidad, la justicia, la producción y la educación.¹⁴

pueblo, se dirige periódicamente a sus ‘hermanas’ y ‘hermanos’, invoca siempre a Dios y sostiene que el suyo es ‘un peronismo de la más alta escuela, el peronismo de la época del fin de las ideologías’”.

¹² *Clarín*, 18/05/95.

¹³ La discusión acerca del acierto o no del radicalismo en suscribir el Pacto de Olivos no está saldada, a pesar de las consecuencias que trajo tanto a nivel electoral como a nivel interno para esta fuerza. Al respecto LILIANA DE RIZ (*Clarín*, 11/12/94) se pregunta: “Vayamos al origen del pacto. Qué podía hacer el radicalismo? No negociar y arriesgarse a un plebiscito por la reelección? Creo que el ejemplo de la provincia de Buenos Aires demuestra a los antipactistas como Federico Storani el inmenso error que consiste en ir a un plebiscito y perderlo todo, hasta la capacidad de negociar. Y, encima, haber concurrido a un acto en el que se permitió que se plebiscite a un gobernador y a un partido, y no a una reforma. Y luego soportar que muchos encuestólogos dijeran: El peronismo ganó 20 puntos”

¹⁴ Al respecto BOLÍVAR LAMOUNIER plantea que “En la Argentina, la tradicional bipolaridad parece que se está deshaciendo, o al menos, pierde el carácter fuertemente antagónico que tuvo en otros momentos históricos, sea por la ampliación de las

La división de la oposición se torna en un factor preocupante cuando se la mira frente a los resultados electorales del partido oficialista: es que la reforma constitucional de 1994 no sólo tuvo consecuencias en cuanto al rediseño del mapa electoral sino, fuertemente, en lo institucional.

A través de la constitucionalización de los decretos de necesidad y urgencia se ha reafirmado la posibilidad de legislar desde el Poder Ejecutivo en detrimento del Congreso. Y, abriendo la vía, esta argucia ha posibilitado también la demora de la reglamentación de algunos de los probables aciertos del nuevo texto constitucional hasta el momento en que el partido oficialista cuente -en diciembre de 1995- con una mayoría en ambas cámaras que le permita aprobar los despachos del ejecutivo sin posibilidad de oposición parlamentaria efectiva.

Al principio del apartado marcábamos que no sólo se estaría presenciando una profundización del presidencialismo sino también una redefinición de la relación estado-sociedad. Un voto con mayor componente utilitario es seguramente un voto más "racional" pero, siendo que la racionalidad es la propia de cada uno de los votantes, el menor componente de voto partidario puede estar indicando también que de esa "racionalidad", lentamente, desaparecen los partidos políticos.

En este sentido, el papel que actualmente cumplen los medios de comunicación en la esfera de las representaciones políticas es un llamado de atención.

Si bien el debilitamiento de la tradicional oposición (UCR) y la débil institucionalización del Frepaso coadyuvan, más allá de los resultados electorales, para que de algún modo el partido en el gobierno refuerce su condición de predominante, es lícito preguntarse si el hecho de que el periodismo opere efectivamente como la oposición al modelo del gobierno, es una característica propia de esta gestión o si indica un nuevo elemento constitutivo de la matriz.

Desde este ángulo, jamás la política había sido tan mediática, tanto por la estrategia de difusión del oficialismo como por la constitución de los programas políticos como el escenario principal de debate.

El Parlamento aparece cada vez más alejado de convertirse, en términos de Nino (1993), en el "locus de la discusión pública, en lugar de ser los canales de televisión o las salas de conferencia de prensa. Estos son los ámbitos elegidos por el menemismo como lugares de difusión de leyes, iniciativas, programas".

hipótesis de negociación y entendimiento, sea por la emergencia de nuevas fuerzas con expresión a nivel nacional, como el Frepaso" (*Clarín*, 19/5/95).

Es de alto simbolismo que la prensa, el periodismo de investigación y la opinión pública aparezcan como los únicos contrapoderes en el discurso de Menem el 14/5, luego de conocerse la tendencia irreversible que lo daba como ganador. De hecho, no es superfluo agregar que la tendencia de los resultados fue anunciada con alta precisión en todos los medios 1 minuto después del cierre de los comicios, producto de un monstruoso operativo de sondeos a boca de urna, y reafirmando que “resulta extremadamente bajo el nivel de deliberación pública, cuyo lugar es ocupado vicariamente por el periodismo, por las discusiones entre “notables” y por la moda de las encuestas de opinión, transformadas en pobres simulacros de genuinas consultas populares”.¹⁵ Así, la época electoral fue signada más por una guerra de encuestas que por un debate político.

Sin embargo, anticipándonos a las conclusiones donde trataremos en particular esta cuestión, esta característica no sería exclusiva de la gestión menemista sino que estaría dando cuenta de una transformación en la arena de la política, un nuevo modo de relacionarse por parte de la ciudadanía *vis-à-vis* del estado. Esto es particularmente acentuado en el caso peruano donde la credibilidad en los partidos políticos, medida en términos de “confianza” y “no confianza”, es del 17% para la primera opción y 77% para la segunda, comparada con la credibilidad otorgada a los medios de comunicación que cuentan con un 58% de confianza contra un 36% que no confía en ellos (Rojas Samanez, 1994).

Otro punto a resaltar referido a los cambios registrados en la matriz es que la disolución de identidades colectivas precipita una demanda local, de comunidad. Y a esta demanda sólo le ha dado respuesta el partido oficial.

Así, en lo que hace a la estrategia electoral del partido oficial, la campaña presidencial de 1995 se asemejó más a una campaña comunal que a la de una elección presidencial, sobre todo en el caso de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, principales distritos electorales del país.

En este sentido, la oposición electoral perdió terreno por contar con poca gestión que demostrar. Y la oposición institucional, sumida en una crisis de liderazgo, en pocos casos sacó provecho de esta cuestión: cuando usufructuó el crédito de una buena gestión local, esto se vio reflejado en los resultados electorales como en los distritos de San Isidro (conurbano bonaerense) o Junín (interior de la provincia de Buenos Aires).

La concreción de hechos, su tangibilidad, se convirtió en uno de los ejes de debate de la campaña, al tiempo que los grandes programas fueron visualizados más como un discurso hueco que como alternativa posible.

¹⁵ NUN, pág. 40.

4. Las fuerzas armadas constitucionalizadas

Una cuestión que no debemos pasar por alto, es el rol que le caben a las fuerzas armadas en el marco de estas matrices ya que en los últimos treinta años éstas fueron protagónicas en ambos escenarios nacionales.

Es de notar que en ambos países, las fuerzas armadas aparecen hoy “constitucionalizadas” a pesar del margen de acción diferencial con el que cuentan en cada caso.

Si bien las fuerzas armadas en el caso peruano tienen en la actualidad un peso mayor que en el argentino, en ambos casos han quedado subordinadas al poder constitucional. Una demostración de esto sería su no protagonismo al momento del auto-golpe, donde si bien no se puede negar el apoyo que le otorgaron a Fujimori, no se convirtieron en las promotoras de la iniciativa, ni en su cara visible.

El peso mayor en el caso peruano puede ser explicado a partir del protagonismo cobrado en la lucha antiinsurgente y por la presencia de históricos conflictos en las fronteras con el Ecuador y con Chile.

Las tendencias que se delinean para el rol de las fuerzas armadas a futuro pueden estar más relacionadas con la introducción de un actor en escena que adquiere un peso creciente: Estados Unidos, quien viene presionando para que su radio de acción apunte a las cuestiones relacionadas con el narcotráfico, problema creciente no sólo en el Perú sino en toda Latinoamérica.

Esto es previsible si se tiene en cuenta el avance logrado con respecto a Sendero Luminoso, que hace posible concebir la retirada de los territorios ocupados militarmente, con lo que se impone un “redestino” de los militares hacia fronteras y lucha contra el narcotráfico.

5. ¿Democracia? ¿Qué democracia?

La redefinición de lo público: el nuevo espacio de la política.

“Al no organizar los partidos el espacio de lo público, éste inicia un proceso de privatización e individualización”
Adrianzen (1992)

La democracia -entendida en los términos clásicos de la doctrina- aparece hoy, en los dos países analizados, como un dato innegable. Dicho régimen se presenta manifiesta y explícitamente aceptado por el conjunto de los actores como el que mejor permitiría y posibilitaría la maximización de

beneficios. Pese a esta afirmación, nos resulta válido preguntar qué tipo de democracia es la que se está consolidando.

Acuña (1995b) visualiza, en términos de tipos ideales en el sentido weberiano, una forma posible de "*organización del poder y articulación de derechos e intereses sociales*": el tipo de democracia neoliberal o fragmentaria.

Esta particular combinación entre ajuste estructural y democracia implica la existencia de actores sociales débiles, producto de una estrategia por parte del estado de desarticulación progresiva de su capacidad de contestación.

Asimismo, el mercado pasa a jugar un rol cada vez más importante como asignador de recursos frente a un estado erosionado en su autonomía y capacidad regulatoria.

En ese marco, las políticas públicas aparecen subordinadas a los criterios del mercado y se refuerza el poder de los grupos económicos que representan a los capitales más concentrados (Smith, 1991).

Como consecuencia de ello, asistimos progresivamente a una "privatización" del espacio público. Este aparece hoy como fuertemente mediático. La opinión pública parece haber reemplazado a las otrora clientelas electorales. Lo que resulta en una paradoja puesto que la construcción social del concepto de opinión pública estaría representando la idea de una unicidad que al mismo tiempo es una expresión de la diversidad en lo social (Grompone, 1995).

Desde esa perspectiva, los medios estarían influyendo en la construcción de los sentidos de la política, y las encuestas se estarían convirtiendo en medios políticos de creación de opinión más que en instrumentos para su conocimiento.

Esta mediatización estaría implicando, al mismo tiempo, la primacía de una estrategia individualista de diferenciación en contraposición a lo colectivo.

Al procesarse las demandas de la comunidad en la televisión, la estrategia de los actores para lograr el éxito de sus objetivos residiría en presentarse como "producto diferenciado", esto es, plantear sus demandas como caso particular para apartarse de cualquier problemática global: "se trata entonces de extremar lo diferente y específico en lugar de presentar su reivindicación asociada a su condición de ciudadano".¹⁶

Siguiendo la línea de pensamiento de Bernard Manin (1992), hoy nos encontraríamos en la democracia de lo público, en la cual los partidos, si bien continúan teniendo un rol importante, se transforman en "instrumentos al

¹⁶ R. GROMPONE.

servicio de un líder".¹⁷ Pero "lo público" aparece no ya con rasgos de colectivo sino como segmentaciones cada vez más pronunciadas.

A lo largo de este trabajo, hemos intentado dar cuenta de que no es casual que en ambos países se delinee matrices políticas con fuertes puntos de contacto: la implementación de los planes de ajuste estructural modelan una particular relación estado-sociedad.

Pero de suyo, esto no se constituye en una cuestión determinista. Como resaltáramos al inicio de este trabajo, el pensar en términos de matrices políticas permite entender que los contextos condicionantes en el que se mueven los actores no son más que una de las variables que permiten el análisis de la realidad.

Sus comportamientos están igualmente influenciados por las lecturas que los actores hacen de dichos contextos, que guían su intencionalidad para enfrentarlos y/o modificarlos.

Así, el panorama actual sugiere que existen diferentes escenarios posibles, lo que permite creer que, si bien los PAE determinan de algún modo la conformación de matrices como la de Menem y la de Fujimori, el peso de los actores y sus diversos juegos posibles pueden hacer variar los escenarios.

Si lo comparamos con el caso de Brasil, podemos pensar que la existencia de fuertes actores políticos con base territorial permite torcer el curso de acción, contrabalanceando el poder central de tendencias personalistas. Y al mismo tiempo, la existencia de estos actores lleva a visualizar una implementación diferente del PAE en ese país.

He aquí una diferencia entre el caso peruano y el argentino. Si bien los partidos aparecen cuestionados en ambos países, en el caso argentino la UCR, a pesar de la derrota electoral en las elecciones presidenciales de Mayo de 1995, no parece destinada a seguir el camino del APRA y Acción Popular. El

¹⁷ Para el autor, "este nuevo carácter del lazo representativo deriva esencialmente, al parecer, de dos causas que, si bien independientes, ejercen efectos convergentes. Las técnicas de comunicación juegan, en primer lugar un papel decisivo: la radio y la televisión (...) le confieren un cualidad directa y sensible a la percepción de los candidatos y elegidos por los electores. El candidato puede -nuevamente- hacerse conocer sin depender de la mediación de organizaciones militantes. (...) Por otro lado, el papel creciente de las personalidades en detrimento de los programas constituye una respuesta a las nuevas condiciones en las cuales se ejerce la actividad de los gobernantes. La amplitud de la tarea de los gobernantes se ha acrecentado considerablemente (...) un programa partidario, salvo que se convierta en algo inmenso, ilegible y por lo tanto inútil para la movilización de los electores no puede contener el catálogo de todas las medidas (...) este entorno deviene ipso facto cada vez menos previsible".

haberse asegurado algunas gobernaciones provinciales en dicha elección y sobre todo haber triunfado en la primera elección para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires¹⁸ -segundo distrito en importancia del país- sitúa a esta fuerza en un escenario de recomposición. En el caso del Frepaso, a pesar de no haber procedido a una institucionalización, el triunfo en la elección de octubre de 1995 por una senaduría en la Capital Federal y la interesante performance en la elección capitalina¹⁹ lo sitúan en una perspectiva más favorable de continuidad que la que pudo haber tenido el Fredemo de Vargas Llosa en su momento o la que se avizora para la UPP de Pérez de Cuellar, siendo este último caso una coalición con un componente de voto similar al del Frepaso. Sin embargo, deberá sortear el desafío de convertirse en una fuerza capaz de ser visualizada no sólo para la tarea legislativa sino también para la acción de gobierno.

En los casos que analizamos en este trabajo, podría aseverarse que se asiste a una transformación de los procesos que enmarcan las relaciones estado-sociedad, que se sintetizaría en lo que se ha dado en conceptualizar como "*la polarización reestructuración/descomposición*": una reestructuración de los patrones organizacionales en el nivel de la producción, la distribución, la comunicación y el consumo que implica la concentración de las decisiones en el marco del mercado; y una descomposición que conlleva la desintegración de las tradicionales formas de producción y organización social. La combinación de ambos polos, para el caso de las sociedades latinoamericanas, se traduce en una profundización del peso diferencial que poseen los actores, en una creciente exclusión de vastos sectores sociales y en la introducción de "*factores deteriorantes del régimen*" (Calderón y Dos Santos, 1995).

Desde ese punto de vista, debemos pensar que resulta crucial el rol de los partidos políticos en la reversión de las tendencias excluyentes y elitistas que se delinean con la aplicación de estos modelos.

¹⁸ Anteriormente, la Ciudad de Buenos Aires era gobernada, en tanto Capital de la República por un delegado del Poder Ejecutivo Nacional. La reforma constitucional de 1994 redefinió el *status* de la Ciudad habilitando la elección directa del Jefe de Gobierno y de una Asamblea encargada de dotar a la Ciudad de su propia Constitución.

¹⁹ En la elección por la senaduría, el Frepaso se aseguró la banca ganando con amplio margen (45%) en todas las circunscripciones de la Capital. Para las elecciones de Jefe de Gobierno del mismo distrito obtuvo el segundo lugar con 26,5% de los votos. Sin embargo en la misma fecha obtuvo la primera preferencia de los porteños para la conformación de la Asamblea Constituyente.

Los partidos “deben recuperar audiencia en un escenario adonde se asiste a un descrédito de la deliberación política y de la elaboración de proyectos, se ha modificado el espacio público y se redefine la trama de la sociedad y las expectativas de los actores”.²⁰

Si hacemos un paralelismo con la temática institucional²¹, es cierto que las instituciones son en gran medida reglas que asignan recursos de poder. Y en este sentido, los partidos políticos como instituciones no escapan a la regla. Surgen para estructurar el conflicto, limitando el rango de opciones que tienen los otros actores con los que interactúan a través de la distribución diferencial de recursos; así, las instituciones tienen consecuencias distributivas y funcionan cuando cuentan con un equilibrio que nadie quiere o puede alterar.

Menem y Fujimori han sabido utilizar este poder para, al menos, asegurarse un nuevo mandato.

El cambio vendrá en tanto se produzca una quiebra en los principios sobre los que descansa el acatamiento a las reglas de juego establecidas. O bien por un exceso en el margen de coerción del sistema, por una distribución desfavorable de incentivos selectivos, por un cambio en las normas o principios morales que le sea adverso o que altere, negativamente, la percepción de ecuanimidad en las reglas.

Si bien la insatisfacción no genera cambios inmediatos necesariamente, ni retiro automático del consenso, la aprobación del modelo y el apoyo condicional a éste pueden verse jaqueados. El quiebre de los factores sobre los que descansa el consenso contingente hace subir los costos del acatamiento y exige, por parte del partido en el gobierno, la generación de recursos de consenso alternativos a los que hasta ahora ha venido instrumentando, tanto en lo discursivo como en la acción de gobierno.

Es posible pensar que la “democratización” de estas matrices políticas pasará necesariamente por la redefinición de los partidos y las organizaciones sociales.

Dicha redefinición deberá lograr que nuevamente estos actores puedan penetrar, y al mismo tiempo ser penetrados por el sentido común de la gente, en vistas de lograr consolidar una “conciencia ciudadana democrática”. Por lo cual, volver a ser interlocutores válidos en la sociedad significará volver a formar parte de ese sentido común.

En este sentido, Menem y Fujimori no son una aparente continuidad

²⁰ ROMEO GROMPONE, 1995.

²¹ Ver al respecto MARGARET LEVI, *A logic of institutional change y Of Rule and Revenue*, Berkeley, The University of California Press, 1988.

caudillesca propia de esta región sino que estarían marcando una nueva etapa: aquella que divide actualmente a la clase política tradicional de la sociedad.

ANEXO

CUADRO 1: ELECCIONES PRESIDENCIALES PERÚ 1995 Y 1990

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1995		1990	
A. Fujimori (Nueva Mayoría-Cambio 90)	64.42%	A. Fujimori (C90)	24.6% 1ª vuelta 56.5% 2ª vuelta
J. Pérez de Cuéllar (Unión Por Perú)	21.81%	M. Vargas Llosa (FREDEMO)	27.3% 1ª vuelta 33.9% 2ª vuelta
M. Cabanillas (APRA)	4.11%	Alva Castro (APRA)	19.2%
A. Toledo (CODE-País Posible)	3.24%	H. Pease (IU)	6.3%
R. Belmont (Mov. Obras Cívicas)	2.58%		
R. Díez Canseco (AP)	1.64%		
E. Ataucusi (Frente Popular Agrícola)	0.7%		
Otros	2.09%		

Fuente: ROJAS SAMANEZ, 1994; ROTH, 1995.

Nota: En las elecciones de 1990, la alianza Fredemo aparece conformada por los partidos Acción Popular y Partido Popular Cristiano, junto con el Movimiento Libertad. En las elecciones de 1995, el PPC retira su candidatura.

CUADRO 2: EVOLUCIÓN DE PORCENTAJES POR PARTIDO DE 1963 A 1985

1963	Acción Popular 40%	APRA 35%	UNO 25%	
1968/1980 Dictaduras de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez				
1980	45%	27%	IZQUIERDA 10%	
1985	6%	49%	27%	Partido Popular Cristiano 10%

Fuente: TOLEDO SEGURA, 1993.

CUADRO 3: ELECCIONES PRESIDENCIALES ARGENTINA 1995 Y 1989

1995		1989	
C. Menem (PJ)	49.92%	C. Menem (PJ)	47.50%
J. O. Bordón (FREPASO)	29.29%	E. Angeloz (UCR)	36.40%
H. Massaccesi (UCR)	16.99%	A. Alsogaray (UCEDE)	6.5%

Fuente: *Clarín*.

CUADRO 4: COMPOSICIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS

Argentina luego de la elección del 95

PARTIDOS	BANCAS
PJ	133
UCR	69
FREPASO	30
OTROS	26

Fuente: *Clarín*.

CUADRO 5: COMPOSICIÓN PARLAMENTO

Perú luego de la elección del 95

PARTIDOS	BANCAS
NM-C90	67
UPP	17
APRA	8
Frente Indep. Moralizador	6
CODE-País Posible	5
AP	4
PPC	3
RENOVACION	3
OTRAS	2
Izquierda Unida	2
Frente Popular Agrícola	1
Perú al 2000	1
Otros	1

Fuente: ROTH, 1995.

BIBLIOGRAFÍA

- ACUÑA, Carlos, *Intereses empresarios, dictadura y democracia en la Argentina actual*, Buenos Aires, Cedes, Documento 39, 1990.
- ACUÑA, Carlos, "La nueva matriz política argentina", 1995a, en ACUÑA, C., *La nueva matriz política argentina, Introducción*, Colección La investigación social, Nueva Visión, Buenos Aires.
- ACUÑA, Carlos, "Política y economía en la Argentina de los 90. (O porque el futuro ya no es lo que solía ser)", 1995b, en ACUÑA, C., *La nueva matriz política argentina, Introducción*, Colección La investigación social, Nueva Visión, Buenos Aires.
- ADRIANZEN, "Democracia y partidos en el Perú: ¿una transición perpetua?", 1992, en GARRETÓN, MANUEL (COORD.), *Los partidos políticos en el inicio de los 90*, Santiago de Chile, Clacso-Flacso.
- BALLÓN, EDUARDO, "Estado, sociedad y sistema político peruano", 1989, en MEYER, L. y REYNA, J. L. (comp.), *Los sistemas políticos en América Latina*, México, Siglo XXI-Universidad de las Naciones Unidas.
- CALDERON, FERNANDO; DOS SANTOS, MARIO, *Sociedades sin utajos. Cultura, política y reestructuración económica en América Latina*, Paidós, Buenos Aires, 1995.
- CORDOVA, MANUEL, "9 de Abril: algo más que un 64%", 1995, en *Cuestión de Estado*, Lima, Año 3, Nº 14-15.
- COTLER, JULIO, "Democracia y desintegración política en Perú", 1992, en MAYORGA, RENÉ (comp.), *Democracia y gobernabilidad*, Caracas, Nueva Sociedad.
- DAMILL, MARIO; FANELLI, JOSÉ MARÍA, *La macroeconomía de América Latina: de la crisis de la deuda a las reformas estructurales*, Buenos Aires, Cedes, Documento 100, Serie Economía, 1994.
- DEGREGORI, Carlos I., "Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros", 1986, en BALLÓN, EDUARDO, *Movimientos sociales y crisis: el caso peruano*, Lima, Desco.
- DEGREGORI, Carlos Y., "Qué difícil es ser Dios. Ideología y violencia en Sendero Luminoso", 1990, en *La nariz del diablo*, Quito, CIESE, Nº 16.
- EGUIGUREN, FRANCISCO, "Las relaciones entre gobierno y parlamento en el Perú", 1995, en *Contribuciones 1/1995*, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer-Ciedla.
- FRANCO, CARLOS, *Reflexiones en Octubre acerca de cómo se examinaba en Mayo lo ocurrido en Abril*, 1994.
- FREDIANI, RAMÓN O., *El caso argentino*, Serie Estabilización y Reforma Estructural, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer-Ciedla, 1993.
- GONZÁLEZ DE OLARTE, EFRAÍN, "Reforma fiscal en el Perú: 1990-1994", 1995, en *Contribuciones 2/1995*, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer-Ciedla.
- GROMPONE, ROMEO, "Los partidos: volver a empezar", 1995, en *Cuestión de Estado*, Lima, Año 3, Nº 14-15.

- GROMPONE, ROMEO, "Los partidós a la búsqueda de la sociedad", 1991, en ROMEO GROMPONE, *El velero en el viento. Política y sociedad en Lima*, Lima, IEP.
- HUNTINGTON, SAMUEL, *El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires, Paidós, 1968, reimpresión 1990.
- IGUÍÑIZ, JAVIER; MUÑOZ, ISMAEL, *Políticas de industrialización del Perú: 1980-1990*, Lima, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 1992.
- LÓPEZ, SINESIO, "Perú 1995: Transición sin consolidación democrática", 1995, en *Cuestión de Estado*, Lima, Año 3, Nº 14-15.
- MAC GUIRE, JAMES, *Peronism as a party: where is the center?* Ponencia presentada en el 15º Congreso Mundial de la IPSA, Buenos Aires, Julio 1991.
- MANIN, BERNARD, "Metamorfosis de la representación", 1992, en *Qué queda de la representación política*, Caracas, CLACSO, Nueva Sociedad.
- MAUCERI, PHILIP, "Military politics and counter-insurgency in Peru", 1991, en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Miami, Vol. 33, Nº 4.
- MORA Y ARAUJO, MANUEL, *El cuadro político y electoral argentino*, mimeo, 1989.
- NOVARO, MARCOS, "Menemismo y peronismo. Viejo y nuevo populismo", 1995, en SIDICARO, R.; MAYER, J. (comp.), *Política y sociedad en los años del menemismo*, Buenos Aires, UBA.
- NUN, JOSÉ, "Averiguaciones sobre algunos significados del peronismo", 1984, en OZLACK, OSCAR (comp.), *Proceso, crisis y transición democrática*, Buenos Aires, CEAL, T. 2.
- NUN, JOSÉ, *Populismo, representación y menemismo*. Versión corregida del trabajo presentado al First Vienna Dialogue on Democracy, 7 al 10/7/1994, en el marco de las jornadas "Política y sociedad en los años del menemismo", Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1995.
- OLSON, MANCUR, *The rise and decline of nations*, New Haven, Yale University Press, 1992.
- PALERMO, VICENTE, "¿El menemismo perdurará?", 1994, en ITURRIETA, A. (comp.), *El pensamiento político argentino contemporáneo*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
- PÁSARA, LUIS, "La crisis de los partidos políticos en Perú: un caso excepcional?", 1993a, en GARRETÓN, MANUEL (coord.), *Los partidos políticos en el inicio de los 90*, Santiago de Chile, Clacso-Flacso.
- PÁSARA, LUIS, "El rol del parlamento: Argentina y Perú", 1993b, en *Desarrollo Económico* Buenos Aires, Nº 128, Vol. 32.
- PRZEWORSKI, ADAM, *Democracy and the market*, Oxford University Press, 1990.
- ROJAS SAMANEZ, ALVARO, *Nuevos retos. Otro rol: Los partidos y los políticos en el Perú*, Salgado, Lima, 1994.
- ROIHL, JOACHIM, "Perú: elecciones presidenciales y parlamentarias", 1995, en *Contribuciones* 1/1995, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer-Ciedla.

SMITH, WILLIAM, "State, market and neoliberalism in post-transition Argentina: The Menem experiment", 1991, en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Miami, Vol. 33, N° 4.

TOLEDO SEGURA, RAFAEL, *El caso peruano*, Serie Estabilización y Reforma Estructural, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer-Ciedla.

UGARTECHE, OSCAR, *Inserción y deuda. Perú, 1985-1990: un caso especial*, Lima, Fondad-Desco-Cepes, 1991.

WILLIAMSON, JOHN, "What Washington means by policy reform", 1990, en WILLIAMSON, J., *Latin American Adjustment: How much has happened*, Washington, Institute for International Economics.

Diarios

Clarín: 11/12/94
 11/4/95
 12/4/95
 18/05/95
 19/5/95

Página 12: 9/4/95
 12/4/95